

**EL DERECHO AMBIENTAL EN CATALUÑA (pp. 1-22)**

—

**EL DRET AMBIENTAL A CATALUNYA (pp. 23-43)**

LUCÍA CASADO CASADO

*Profesora titular de Derecho Administrativo / Professora titular de Dret Administratiu*

*Universitat Rovira i Virgili*

—

*Investigadora*

*Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona*

**Sumario.** 1. El impacto de la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas en materia urbanística y ambiental: una nueva oleada de reformas normativas a través de una Ley de acompañamiento de los presupuestos. 1.1. Las modificaciones legislativas en materia de urbanismo. 1.2. Las modificaciones legislativas en materia de ordenación ambiental. A. La modificación de la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, por la que se establecen normas adicionales de protección de los espacios de especial interés natural afectados por actividades extractivas. B. La modificación de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno. C. La modificación de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. D. La modificación del Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos. E. La modificación de La Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico. 1.3 Las modificaciones legislativas en materia de ordenación de las aguas. 1.4. Las modificaciones en materia de medio natural y caza. 2. Nuevas medidas tributarias frente a la contaminación atmosférica: la creación del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear. 3. La aprobación del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña y de su Programa de medidas. 4. El nuevo Catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección. 5. El levantamiento de la suspensión de la prohibición indirecta del *fracking* en Cataluña. 6. Otras normas de interés. 7. Algunas actuaciones de interés desde la perspectiva de la protección del medio ambiente. 7.1. Hacia un nuevo modelo de gestión de los espacios naturales protegidos en Cataluña: el Plan de gestión de los espacios naturales de protección especial de Cataluña 2015-2020. 7.2. La aprobación de la revisión de varios Planes en ámbitos diversos.

Esta crónica se concentra excepcionalmente solo en la producción legislativa autonómica. En el período examinado (del 1 de octubre de 2014 al 31 de marzo de 2015), se ha producido un buen número de novedades normativas en materia ambiental en Cataluña, aun cuando, curiosamente, no se ha aprobado ninguna norma con rango de ley específicamente ambiental. En efecto, tal y como viene siendo habitual en los últimos años, persiste la “sequía” en las políticas ambientales y en la aprobación de nuevas normas sustantivas y más que a la aprobación de nuevas leyes ambientales, asistimos a la modificación de las ya existentes, con el fin de adaptarlas al contexto actual, en muchas ocasiones, como ha sucedido ahora, aprovechando la ley de acompañamiento de los presupuestos para introducir reformas –algunas de gran calado– de la normativa ambiental catalana. En esta línea, cabe situar la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas, que modifica una serie normas con rango de ley en materia ambiental, aunque quizá la más destacable sea la de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, toda vez que supone la adaptación del ordenamiento jurídico catalán a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) y a la legislación básica estatal que la incorpora (Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos

contaminados; y Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002). Además de esta Ley, cabe mencionar la Ley 12/2014, de 10 de octubre, a través de la cual se crean tres nuevos tributos ambientales en Cataluña para hacer frente a la contaminación atmosférica: el impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, el impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear.

En el ámbito reglamentario, las normas más destacables son los Decretos 171/2014, de 23 de diciembre, de aprobación del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña –consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2014, que declaró la nulidad de pleno derecho del Decreto 188/2010, mediante el cual se aprobaba este Plan, por ausencia de dictamen de la Comisión Jurídica Asesora–; y 30/2015, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas.

También debe destacarse el levantamiento de la suspensión, por parte del Tribunal Constitucional, del artículo 167.1 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, que había modificado el artículo 47 del texto refundido de la Ley de urbanismo, con el fin de introducir la prohibición de utilización de la tecnología de la fractura hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o con relación a otros ámbitos competenciales de la Generalitat.

En cuanto a los proyectos de ley en trámite, en este período ha iniciado su tramitación el Proyecto de Ley de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica; y continúa su curso la tramitación del Proyecto de Ley de ordenación de las actividades de espectáculos públicos y recreativas.

En el ámbito de la planificación, lo más destacable es la aprobación del Plan de gestión de los espacios naturales de protección especial de Cataluña 2015-2020. Asimismo, el Gobierno también impulsa el Plan de gestión de los espacios naturales protegidos de Cataluña 2014-2016, que prevé la preservación y gestión de estos espacios, de acuerdo con las directivas europeas y bajo criterios de sostenibilidad.

Por último, desde el punto de vista de las iniciativas y actuaciones de interés político, cabe destacar el anuncio por parte del Presidente de la Generalitat, en comparecencia en el Parlament de Catalunya en febrero de 2015, de la creación de una Agencia de Medio Ambiente a partir de la fusión de la Agencia Catalana del Agua, la Agencia de Residuos de Cataluña, el Servicio Meteorológico de Cataluña y el Instituto Cartográfico.

---

### **1. El impacto de la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas en materia urbanística y ambiental: una nueva oleada de reformas normativas a través de una Ley de acompañamiento de los presupuestos**

Recientemente, se ha publicado en el DOGC la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas en materia urbanística y ambiental. De nuevo, a través de una Ley de acompañamiento de los presupuestos se aprueba una batería de modificaciones legislativas que, entre otras materias, afectan al urbanismo y al medio ambiente, introduciéndose algunas novedades de entidad. No podemos menos que criticar de nuevo el uso y el abuso de esta técnica legislativa, de la cual se está haciendo una amplia utilización en los últimos años en Cataluña y a través de la cual se realizan importantes modificaciones de la legislación ambiental, como sucede esta vez, por ejemplo, con la Ley 20/2009, de 4 de diciembre. A los efectos de esta crónica, nos centraremos en el Título V de la Ley 3/2015, de medidas administrativas en materia de vivienda y urbanismo, ordenación ambiental, ordenación de aguas y transportes, y en el Título VI, de medidas administrativas en competencias de medio natural y agricultura. Todo ello sin olvidar que también en el marco de esta Ley se incluyen, dentro del Título I, “Medidas Fiscales”, algunas modificaciones que afectan a algunos tributos ambientales (a los cánones sobre la disposición del rechazo de los residuos, al canon del agua y al impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear) y a algunas tasas (entre otras, las de la Agencia Catalana del Agua y de la Agencia de Residuos de Cataluña, las de los permisos de caza mayor y menor, las de los servicios de autorización ambiental de actividades o las de pesca recreativa); y en el Título IV, algunas medidas de reestructuración y racionalización del sector público que afectan, entre otras entidades de derecho público e la Generalitat al Servei Meteorològic de Catalunya, al Institut Català d’Energia i al Centre de la Propietat Forestal.

### *1.1. Las modificaciones legislativas en materia de urbanismo*

En materia urbanística, la Ley 3/2015 modifica los artículos 47, 120 y 122 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, mediante el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo; y la disposición final tercera de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo. De estas modificaciones, destacan especialmente la determinación de la compatibilidad en suelo no urbanizable de la vivienda de uso turístico con el uso de vivienda familiar legalmente implantado; algunos cambios que afectan al sistema de actuación por reparcelación; y la prórroga de la suspensión de la eficacia temporal de la expropiación por ministerio de la ley del 31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015.

### *1.2. Las modificaciones legislativas en materia de ordenación ambiental*

En materia de ordenación ambiental, la Ley 3/2015 ha modificado cinco normas con rango de ley en materia ambiental: la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, de protección de los espacios de especial interés natural afectados por actividades extractivas; la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno; la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades; el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio; y la Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del medio ambiente atmosférico.

A. La modificación de la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, por la que se establecen normas adicionales de protección de los espacios de especial interés natural afectados por actividades extractivas

La Ley 3/2015 modifica varios artículos de la Ley 12/1981, de 24 de diciembre. Dos son los aspectos más destacables de esta reforma. En primer lugar, se modifica el apartado 2 del artículo 7 de la Ley 12/1981, y se introducen algunas novedades interesantes en el ámbito de la inspección. Con carácter general, se establece que la inspección de la actividad por lo que hace referencia a las medidas adicionales de protección del medio ambiente, corresponde a los funcionarios de la dirección general competente en materia de protección de espacios naturales afectados por actividades extractivas o de las unidades territoriales correspondientes, que deben coordinarse con

la actuación inspectora de los funcionarios del departamento competente en materia de minas. Sin embargo, como novedad, se prevé ahora que las inspecciones de seguimiento y comprobación de los programas de restauración puedan encomendarse por la Administración ambiental a entidades colaboradoras de la Administración debidamente acreditadas. Se abre, de esta forma, un nuevo ámbito a las entidades colaboradoras de la Administración, cuya actuación ya goza de una larga tradición en otros sectores ambientales (buen ejemplo de ello es el de la prevención y control ambiental de las actividades).

En segundo lugar, se introducen otras modificaciones con el fin de adaptar parcialmente esta Ley a los últimos cambios de la normativa básica estatal y a la organización interna del Departamento competente en esta materia, coordinando adecuadamente la aplicación de algunos preceptos de la normativa ambiental y minera. Desde esta perspectiva, se concreta, por ejemplo, que la obligación del titular de depositar la fianza que corresponda en cada momento y de restaurar los terrenos afectados en las condiciones establecidas en el programa de restauración continuará vigente hasta el momento en que la Administración ambiental acepte definitivamente la restauración efectuada a la finalización, en su caso, del plazo de garantía, independientemente de la situación administrativa de la autorización minera; se determinan los órganos competentes para imponer las sanciones correspondientes a infracciones leves (director de los servicios territoriales competente en materia de protección de los espacios afectados por actividades extractivas), graves (director competente en materia de protección de los espacios afectados por actividades extractivas) y muy graves (secretario del departamento competente en materia de protección de los espacios afectados por actividades extractivas); y se habilita al secretario del departamento competente en materia de protección de los espacios naturales afectados por actividades extractivas, en los casos de urgencia en que peligre la protección del medio ambiente, para suspender provisionalmente los trabajos de la actividad extractiva hasta que se adopten las medidas adecuadas.

B. La modificación de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno

Con relación a la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno, tres son las modificaciones destacables. En

primer lugar, se matiza la prohibición de la iluminación en las pistas de esquí. En su nueva redacción, la letra e) del artículo 6.6, prohíbe la iluminación de las pistas de esquí en zonas E1, excepto para acontecimientos deportivos extraordinarios, según los que se establezca por reglamento, y en el resto de zonas, por una duración superior a un valor establecido por reglamento. Asimismo, prevé que, por reglamento, también se puedan fijar las franjas horarias en que se permite el alumbrado y otras condiciones adicionales para la protección del medio nocturno y de la fauna.

En segundo lugar, se modifica el régimen de inspección y control de las actividades sometidas a la normativa de prevención y control ambiental (art. 25). El titular de la actividad debe garantizar en todo momento que se cumplen las prescripciones fijadas en materia de prevención de la contaminación lumínica en el permiso de la actividad. En cuanto a los controles ambientales iniciales o las inspecciones ambientales de inicio de la actividad de las actividades sujetas a la normativa de prevención y control ambiental, deben incluir la comprobación del cumplimiento de las prescripciones establecidas en los correspondientes permisos en materia de prevención de la contaminación lumínica. Por lo que respecta al cumplimiento de las prescripciones en materia de prevención de la contaminación lumínica incluidas en los permisos ambientales, se establece una periodicidad de control, como máximo, cada seis años, teniendo en cuenta que, siempre que sea posible, estas actuaciones de comprobación se deben llevar a cabo en el marco del control ambiental periódico o de la inspección periódica integrada de los establecimientos. También se incorpora la exigencia, para las actividades sometidas al régimen de comunicación que dispongan de instalaciones de iluminación exterior de más de 5 kW de potencia, de acompañar la comunicación de una certificación acreditativa del cumplimiento de las prescripciones en materia de prevención de la contaminación lumínica entregada por una entidad colaboradora de la Administración o por los servicios técnicos municipales.

En tercer lugar, vuelve a modificarse la disposición transitoria primera de la Ley 6/2001. De conformidad con su actual redactado, se impone el cese del funcionamiento de cualquier elemento de una instalación de alumbrado exterior que esté incluida en alguno de los supuestos siguientes: lámparas ubicadas en zona E1 que no son de vapor de sodio u otras tecnologías de características espectrales similares, lámparas de vapor de mercurio de alta presión y luces que tengan un flujo de hemisferio superior instalado superior al 50%. El plazo establecido a estos efectos vence el 31 de marzo de 2016, si se

trata de instalaciones ubicadas en un punto de referencia o en su área de influencia; el 31 de diciembre de 2016, si se trata de instalaciones de titularidad pública; o el 31 de diciembre de 2018, si se trata de instalaciones de titularidad privada.

### C. La modificación de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades

La modificación de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, responde en buena medida a su necesidad de adaptación a la Directiva de emisiones industriales y a la legislación básica estatal. Debe criticarse que la incorporación de las previsiones de una Directiva europea y de la correspondiente legislación básica estatal, en un ámbito de gran importancia como es el de la intervención sobre las actividades de mayor incidencia ambiental, a las que afecta la normativa a que nos venimos refiriendo, se realice aprovechando la aprobación de una Ley de acompañamiento de los presupuestos, sin haber propiciado el necesario debate y participación. También debe llamarse la atención sobre el hecho de que con esta reforma ya van cinco de la Ley 20/2009 –la mayor parte de ellas a través de macroleyes de este tipo, en que se modifican numerosas normas en ámbitos sectoriales diversos que no guardan conexión entre ellos–, a pesar de que han pasado poco más de cinco años desde su aprobación. Y se aproxima una nueva modificación, habida cuenta de la próxima aprobación como Ley del actual Proyecto de Ley de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica que, de nuevo, modificará la Ley 20/2009. Quizá sea el momento ya de realizar una reflexión profunda del régimen de prevención y control ambiental de actividades en Cataluña y de aprobar una nueva Ley que dé respuesta a las actuales necesidades en este ámbito, pero sin hacerlo de forma precipitada y siguiendo esta vez la tramitación ordinaria como proyecto de ley, que propicie el necesario debate parlamentario en un tema de extraordinaria importancia. En esta línea, debe recordarse, como ya apuntábamos en la anterior crónica que el Gobierno ya aprobó hace unos meses una memoria preliminar del Anteproyecto de ley de prevención, control y calidad ambiental, que vendría a sustituir a la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades y que nace con la voluntad de racionalizar y simplificar trámites en la intervención sobre las actividades económicas.

Con la finalidad de adaptar la normativa catalana a la Directiva de emisiones industriales y a la legislación básica estatal, se realizan una serie de modificaciones que afectan a las actividades del Anexo I.1, que son las afectadas por esta normativa. Entre estas modificaciones, destacamos la introducción de nuevas definiciones (por ejemplo, las de “conclusiones de las mejores técnicas disponibles”, “informe base o informe de la situación de partida”); la regulación del régimen jurídico de las actividades del anexo I.1 cuando la modificación de una instalación comporte una disminución de su capacidad de producción hasta quedar por debajo de los umbrales del anexo correspondiente; la regulación de la revisión de oficio para las actividades del Anexo I.1, teniendo en cuenta que para estas actividades desaparece la revisión periódica, aunque sí se mantiene para las del Anexo I.2 y II; el régimen del cese definitivo de las actividades del Anexo I.1, regulado *ex novo*, en línea con lo establecido en la Directiva de emisiones industriales y en la Ley 16/2002, tras su modificación de 2013; el nuevo sistema de inspección para estas actividades –sustitutorio del de control–, instrumentado mediante el Plan de inspección ambiental integrada y el Programa de inspección ambiental integrada, ambos ahora ampliamente regulados en la Ley 20/2009, según las determinaciones de la directiva europea y de la legislación básica estatal; la regulación de la actuación administrativa relativa a las visitas de inspección y las visitas de inspección no programadas; y las adaptaciones del régimen sancionador a estas modificaciones.

También son objeto de modificación los anexos de la Ley 20/2009. Por una parte, se suprimen determinadas actividades de los anexos, básicamente las de radiocomunicaciones y turismo. Por otra, los proyectos de exploración o investigación que utilicen la técnica de la fractura hidráulica se incluyen en el Anexo I.2.a) y se someten a evaluación de impacto ambiental y a autorización ambiental, por razón de su elevada incidencia ambiental.

---

D. La modificación del Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos

La Ley 3/2015 modifica un buen número de preceptos del Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos. Destacamos, en particular, las siguientes modificaciones:

— La nueva definición de “desechería”, para incluir, además de los residuos municipales los productos para la reutilización, con el fin de adaptar la definición

formal de esta instalación a la realidad actual. La desechería se define ahora como centro de recepción y almacenamiento selectivos de productos para la reutilización y de residuos municipales para tratamientos posteriores: la preparación para la reutilización, la valorización y la disposición final.

— La modificación de diversos preceptos del texto refundido [arts. 5.1, 22.1, 23.1.c), 24.1.d), 28.2, 29.3 y disposición final 2ª], con el fin de poder regular mediante reglamento la producción y la gestión de todos los residuos y no sólo la de determinadas categorías de residuos, como se establecía anteriormente.

— La modificación del régimen sancionador, a través de una nueva regulación de las infracciones administrativas en este ámbito (se da nueva redacción a los artículos 72, 74, 75 y 76), así como de los grados de la multa (nueva redacción del art. 80); la incorporación de un nuevo artículo, el 77 bis, de conformidad con el cual se establece que es causa de baja en los correspondientes registros administrativos de la Agencia de Residuos de Cataluña el hecho de haber sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de determinadas infracciones administrativas, cuando así se haya acordado por el órgano sancionador; la inclusión de un precepto, el 80 bis, relativo al reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario, que permite al presunto infractor hacer el pago voluntario del 50% del importe de la sanción de multa determinada en la propuesta de resolución, siempre que se trate de infracciones leves y que implica el reconocimiento de responsabilidad por parte del presunto infractor y su renuncia a formular alegaciones, la terminación del procedimiento el día en que se hace el pago y la finalización de la vía administrativa; la introducción de cambios en la potestad sancionadora mediante la modificación del límite de la potestad sancionadora (los alcaldes de municipios de menos de 50.000 habitantes, hasta 30.000 euros; los de municipio de más de 50.000 habitantes, el presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos y el director de la Agencia de Residuos de Cataluña, hasta 300.000 euros, el presidente de la Agencia de Residuos de Cataluña, hasta 600.000 euros, y el Gobierno, hasta 1.200.000 euros) y de los órganos competentes para imponer sanciones que no sean multas; las modificaciones en los sujetos responsables, mediante la incorporación de un nuevo párrafo al final del apartado 2 del artículo 91, en el que se prevé que, en los casos de imputación de una infracción a una persona jurídica, puedan ser consideradas también responsables las personas que integran los órganos rectores o de dirección y también los técnicos

responsables de la actividad siempre que se demuestre la existencia de culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones; las nuevas previsiones en torno a la extinción de la responsabilidad, la extinción de la sanción y el procedimiento abreviado (nuevos artículos 91 bis, 91 ter y 103 bis); y algunas modificaciones que afectan a las medidas cautelares (art. 96), la reparación y ejecución subsidiaria (art. 124).

#### E. La modificación de La Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico

La Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico, únicamente resulta objeto de modificación en un punto, en relación con el Fondo para la protección del ambiente atmosférico. Este Fondo, regulado en el artículo 15 de la Ley 22/1983 –previamente modificado a través de la Ley 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear–, se creó con el fin de destinarlo a financiar los gastos y las inversiones públicas en materia de protección del ambiente atmosférico y de mejora de la calidad acústica, a fomentar las actuaciones en instalaciones públicas y privadas destinadas a disminuir los niveles de emisión de contaminación a la atmósfera y, en general, a las políticas de prevención y mejora de la calidad atmosférica. Este fin se nutre de diferentes recursos (importe de las sanciones impuestas por la Administración de la Generalitat, como consecuencia de infracciones de la normativa que regula la contaminación atmosférica; las donaciones, las herencias, las aportaciones y las ayudas que los particulares, las empresas, las instituciones u otras administraciones destinan específicamente a este Fondo; los remanentes procedentes de economías en la contratación y los ingresos procedentes de revocaciones o renunciaciones de ayudas o subvenciones financiadas con el Fondo; y las aportaciones del Presupuesto de la Generalitat de Catalunya y cualquier otro ingreso de derecho público que le sea asignado reglamentariamente). Con la modificación introducida por la Ley 3/2015 en la letra b) del apartado 4 del artículo 15, ahora se prevén, dentro de los recursos que nutrirán el Fondo, los ingresos derivados de los impuestos ambientales que graven las emisiones contaminantes a la atmósfera y que devengan finalistas (se añade este último inciso).

### *1.3. Las modificaciones legislativas en materia de ordenación de las aguas*

Las modificaciones legislativas de la Ley 3/2015 en materia de aguas se concretan en la modificación de diversos artículos del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado mediante el Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre. De estas modificaciones destacamos, en primer lugar, una serie de cambios que afectan a la planificación hidrológica del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, en la que pasan a integrarse el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, el programa de medidas, los programas de control y los programas y planes de gestión específicos. En este contexto, también se concreta el ámbito de aplicación del Programa de medidas y de los planes y programas de gestión específicos para tratar aspectos concretos del abastecimiento y del saneamiento de las aguas residuales y de otras materias relacionadas con el ciclo del agua que sean de competencia de la Generalitat.

En segundo lugar, la inclusión, a través de la incorporación de un nuevo apartado 4 en el artículo 52, de la posibilidad de que los entes locales deleguen en la Agencia Catalana del Agua la gestión de las instalaciones que integran los sistemas públicos de saneamiento en alta de su competencia, con independencia del régimen de titularidad de estas instalaciones.

En tercer lugar, una serie de modificaciones que afectan a las atribuciones de recursos de la Agencia Catalana del Agua para contribuir a la financiación de los sistemas públicos de saneamiento, de conformidad con lo que establezca la planificación hidrológica. Para el ejercicio presupuestario 2015 y siguientes, las atribuciones de recursos incluirán los costes indirectos de explotación de los servicios públicos de saneamiento, como los gastos de gestión de instalaciones y los gastos de gestión de sistema. Se pretende, de esta forma, un sistema de atribución de fondos que permita asegurar a los entes gestores de los sistemas públicos de saneamiento más complejos la percepción de los recursos económicos suficientes para el mantenimiento de los servicios de competencia local. Asimismo, se prevé un modelo de atribución de recursos específico para los entes gestores que se hayan constituido en entidades locales del agua. En efecto, se habilita al Gobierno para autorizar la suscripción de un convenio de colaboración entre la Agencia Catalana del Agua y los entes gestores de sistemas públicos de saneamiento en alta que se hayan constituido en entidades locales del agua, con el fin de definir un marco de atribución de recursos procedentes del canon del agua para financiar los gastos de explotación, de reposición y de inversión correspondientes a

los sistemas públicos de saneamiento en alta. Con estas reformas, se pretende acabar de perfilar la reforma del modelo de atribución de recursos que lleva a cabo la Agencia Catalana del Agua para contribuir a la financiación de los sistemas públicos de saneamiento en alta, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en la asignación de fondos públicos.

Por último, se añade una nueva disposición adicional, la decimoctava, al texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, en relación con los servicios y actividades de ocio en los embalses. Esta disposición prevé que, en el ámbito del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, los entes locales o las agrupaciones de entes locales pueden asumir con carácter preferente la explotación de los servicios y las actividades de ocio que se puedan establecer en el dominio público hidráulico y en las zonas de servidumbre y de policía de los embalses en cauces públicos. Esta explotación podrá hacerse de manera directa o indirecta mediante cualquiera de las formas de gestión establecidas por la legislación de régimen local.

#### *1.4. Las modificaciones en materia de medio natural y caza*

El Título VI de la Ley 3/2015 agrupa las medidas administrativas en competencias de medio natural y agricultura. Con relación al medio natural, se modifican la Ley 9/1995, de 27 de julio, de regulación del acceso motorizado al medio natural, para tipificar como infracción administrativa la circulación, sin causa justificada, por viales no aptos para la circulación motorizada, o por las pistas y los caminos delimitados en redes e itinerarios sin disponer de autorización específica; y el texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado mediante el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, con el fin de concretar que el Registro general de animales de compañía puede ser gestionado directamente por el departamento competente en materia de medio ambiente, o bien mediante cualquiera de las modalidades establecidas por la legislación de contratos del sector público.

Respecto a la caza, se modifica la Ley 8/2012, de 25 de junio, de modificación de los límites y la denominación de la Reserva Nacional de Caza del Alt Pallars-Aran, para articular la segregación del término municipal de Vall de Boí de esta Reserva Nacional, y se crea la Reserva Nacional de Caza de Vall de Boí.

## **2. Nuevas medidas tributarias frente a la contaminación atmosférica: la creación del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear**

Mediante la Ley 12/2014, de 10 de octubre, se han creado en Cataluña, como tributos propios de la Generalitat, tres nuevos impuestos, con el fin de reducir la contaminación atmosférica y alcanzar los niveles de calidad del aire fijados por la normativa: el impuesto sobre las emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, el impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear. Tal y como se pone de manifiesto en el Preámbulo de la Ley, estos nuevos impuestos “se configuran desde una doble vertiente. Por una parte, su carácter extrafiscal pretende orientar el comportamiento de los agentes económicos afectados, con la interiorización de los costes no deseados y de las externalidades negativas que generan con su actividad, con el objetivo de contribuir a la mejora y la preservación del medio ambiente. Por otra parte, devienen instrumentos de política económica y, en este sentido, no se puede negligir que concurre también una finalidad fiscal, puesto que con su exacción se obtendrán ingresos adicionales que han de permitir subvenir, en parte, a los gastos e inversiones públicas en materia de medio ambiente y, en general, a las políticas de fomento de la preservación y la mejora de la calidad del medio ambiente”.

Esta Ley se estructura en cuatro capítulos. En el capítulo I, se regula el impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, cuyo objeto es gravar la emisión de óxidos de nitrógeno de las aeronaves en vuelos comerciales de pasajeros en los aeródromos durante el ciclo LTO (landing and take-off) —que comprende las fases de rodaje de entrada al aeropuerto, de rodaje de salida del aeropuerto, de despegue y de aterrizaje—, por el riesgo que provoca en el medio ambiente. La creación de este impuesto constituye una novedad en el ordenamiento jurídico español, ya que los precedentes más próximos se encuentran en Francia, Alemania y Reino Unido.

En el capítulo II, se contienen los preceptos dedicados al impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria, que grava la emisión a la

atmósfera de las sustancias a las que se refiere el artículo 12, con la finalidad de incentivar conductas más respetuosas hacia el medio ambiente atmosférico y conseguir una mejor calidad del aire, generadas en determinadas instalaciones (las instalaciones industriales clasificadas en el anexo I.1 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades; y las instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 megavatios térmicos). Esta figura impositiva, tal y como se pone de manifiesto en el Preámbulo de la Ley, se crea como instrumento de estímulo e incentivo a la reducción de la contaminación atmosférica, con mejoras técnicas para reducir las emisiones atmosféricas industriales y, por tanto, mejorar la calidad del aire de los ciudadanos próximos a actividades industriales. De esta forma, Cataluña se une a otras comunidades autónomas que ya tienen aprobados impuestos similares, como Aragón, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, Galicia y Andalucía.

El capítulo III regula el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, por la incidencia que puede tener en el medio ambiente. El objeto de este impuesto es gravar los riesgos por el impacto y eventual daño en el medio ambiente derivados de la actividad de producción de energía eléctrica de origen nuclear efectuada en el territorio de Cataluña. Su precedente más inmediato está en la Comunidad Valenciana, que, mediante la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, crea el impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente, uno de cuyos hechos impositivos es el daño, el impacto, la afección y el riesgo derivado de la producción de energía eléctrica. La creación de este impuesto conlleva, a su vez, la modificación de la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña, que regula el gravamen de protección civil que grava las centrales nucleares, de modo que éstas, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, quedan excluidas de la tributación del gravamen.

El capítulo IV recoge una serie de normas comunes a los tres impuestos, que incluyen aspectos relativos a aspectos de gestión, recaudación e inspección; el régimen de infracciones y sanciones; y el de recursos y reclamaciones.

Por último, cabe destacar que esta Ley, como ya avanzamos, también modifica el artículo 15 de la Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del medio ambiente atmosférico, relativo al Fondo para la protección del ambiente atmosférico.

### **3. La aprobación del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña y de su Programa de medidas**

Recientemente, se ha aprobado el Decreto 171/2014, de 23 de diciembre, de aprobación del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña y se ha adoptado el Acuerdo GOV/186/2014, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de medidas del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.

El Gobierno de la Generalitat ya había aprobado hace algunos años, en cumplimiento de lo establecido por la Directiva marco de aguas, el Plan de de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña para el período 2009-2015, mediante el Decreto 188/2010, de 23 de noviembre, y su Programa de medidas, mediante el Acuerdo GOV/238/2010, de 23 de noviembre. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2014 declaró la nulidad de pleno derecho del Decreto 188/2010, por falta de Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y por extensión, del Programa de medidas, lo que obligó a retrotraer la tramitación para enmendar tal defecto procedimental, una vez adoptado el Acuerdo adoptado por el Gobierno el 22 de julio de 2014, relativo a la conservación de trámites del procedimiento de aprobación del citado Decreto y del Programa de medidas. Cumplimentado este trámite, se elevó al Gobierno para su nueva aprobación, efectuada ahora mediante el Decreto 171/2014, de 23 de diciembre, de aprobación del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña y el Acuerdo GOV/186/2014, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de medidas del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.

### **4. El nuevo Catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección**

Recientemente, el Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Decreto 30/2015, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas, de acuerdo con la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña y la disposición adicional segunda del Decreto 82/2010, de 29 de junio, que ordenaba la actualización de dicho catálogo al cabo de cuatro años de su entrada en vigor, en base a la experiencia adquirida como consecuencia de su aplicación. Este Decreto, que deroga al mencionado

Decreto 82/2010, tiene por objeto regular las actuaciones destinadas a adoptar las medidas de autoprotección y los medios personales y materiales necesarios para afrontar situaciones de riesgo y de emergencia en las empresas y, en general, las entidades y organismos que pueden resultar afectados de manera especial por situaciones de grave riesgo colectivo, interno o externo, de catástrofe o de calamidad pública, y también en las actividades, centros e instalaciones y sus dependencias, públicos y privados, que pueden generar estas situaciones. Las finalidades que se persiguen son determinar el catálogo de actividades y tipo de centros con obligación de autoprotección; establecer el contenido mínimo de los planes de autoprotección de los centros o actividades objeto de esta norma; establecer los sistemas de coordinación entre las actividades y centros objeto de este Decreto y los servicios públicos que forman el sistema de protección civil; establecer los sistemas de control por parte de la Administración, tanto autonómica como local, respecto a la validación del plan, su registro y su proceso de implantación; regular los mecanismos organizativos y la provisión de los medios necesarios para asegurar la detección y respuesta rápida y para evitar efectos de gran intensidad o impacto en la población; y asegurar la existencia y el mantenimiento de los medios mínimos de autoprotección por parte de las actividades y centros y a través del control periódico por parte de la Administración, tanto autonómica como local.

En cuanto a su ámbito de aplicación, las disposiciones de este Decreto se aplican a las actividades y centros de interés para la protección civil de Cataluña detallados en el anexo I, epígrafe A, y a las actividades y centros de interés para la protección civil local comprendidos en el anexo I, epígrafe B. Por lo que respecta al catálogo, se reducen de manera significativa las actividades y centros afectados para adecuarlo a aquellos en los que sea imprescindible la realización de los planes de autoprotección, y se fijan una serie de criterios con el objetivo de crear un catálogo con una estructura más sencilla, con una relación de actividades y centros más detallada y precisa. En este sentido, se equiparan determinadas actividades y centros de interés para la protección civil de Cataluña a los mismos umbrales que los fijados en la Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que pueden dar origen a situaciones de emergencia, aprobada por el Real decreto 393/2007, de 23 de marzo. Se simplifica el número de actividades afectadas por la norma y se elimina la distinción entre las actividades con reglamentación específica o sin. Asimismo, las actividades o centros que se incluían en el catálogo en función de su ocupación de

personas se fusionan en un criterio más genérico y de referencia, y en cuanto a las actividades sanitarias, docentes y residenciales públicas, se homogeneizan los criterios de ocupación. En cuanto al catálogo de actividades y centros de interés para la protección civil local, se establece un catálogo de mínimos con unos umbrales más amplios para que sean los mismos municipios los que regulen de una forma más concreta las actividades y centros que sean de su interés de conformidad con su ámbito competencial.

Igualmente, la dirección general competente en materia de protección civil o bien el municipio afectado, de oficio o a petición de la persona interesada, pueden incluir dentro del ámbito de aplicación de este Decreto nuevas actividades y centros que, sin estar incluidos en los epígrafes A y B del anexo I, presenten un especial riesgo o un riesgo significativo, respectivamente, siguiendo el procedimiento establecido. Asimismo, la persona titular de un centro o actividad no sometido al presente Decreto puede elaborar un protocolo de actuación en emergencias para regular internamente las actuaciones destinadas a adoptar medidas de autoprotección y los medios personales y materiales necesarios para afrontar situaciones de riesgo y de emergencia. Si la actividad afecta a más de un municipio, tendrá la consideración de actividad de interés para la protección civil de Cataluña. Por otra parte, quedan excluidos del control administrativo de la Generalitat los centros, establecimientos o instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa, de instituciones penitenciarias, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y las aduanas, así como los órganos judiciales.

## **5. El levantamiento de la suspensión de la prohibición indirecta del fracking en Cataluña**

Tal y como se ponía de manifiesto en la primera crónica de 2014, tras la modificación operada por el artículo 167.1 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, el artículo 47, en su apartado 10, del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, mediante el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo, incorpora una prohibición indirecta del *fracking* en Cataluña. En efecto, con arreglo a este precepto, en la explotación de recursos naturales en suelo no urbanizable, en el caso de aprovechamientos de hidrocarburos, no está

permitido utilizar la tecnología de la fractura hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o con relación a otros ámbitos competenciales de la Generalitat. En la práctica, ello implica que no podrán otorgarse los permisos urbanísticos para construir y poner en marcha en territorio catalán instalaciones con el objeto de utilizar esta técnica de extracción de hidrocarburos. De esta forma, en Cataluña se incorporaba una prohibición indirecta del uso de esta técnica. Sin embargo, contra la Ley 2/2014, de 27 de enero, interpuso recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, recurso que el Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite mediante Providencia de 18 de noviembre de 2014, produciéndose la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso (30 de octubre de 2014) para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el BOE para los terceros<sup>1</sup>.

Recientemente, el Pleno del Tribunal Constitucional, mediante Auto de 17 de marzo de 2015, ha levantado la suspensión del artículo 167.1 y de la disposición transitoria 5ª, apartados 1 y 3, de la Ley 2/2014, de 27 de enero, que se había producido con la admisión a trámite del mencionado recurso de inconstitucionalidad<sup>2</sup>. De este modo, el Tribunal Constitucional actúa de forma diferente a como lo había hecho en los recursos de inconstitucionalidad presentados contra las Leyes prohibitorias del *fracking* de Cantabria, La Rioja y Navarra. En estos casos, cuando correspondía al Alto Tribunal adoptar la decisión en torno al mantenimiento o levantamiento de la suspensión de estas normas, la opción fue la de dictar ya la Sentencia correspondiente resolutoria del recurso, declarando la inconstitucionalidad de tales leyes autonómicas<sup>3</sup>. En cambio, en el caso de Cataluña, la opción ha sido levantar la suspensión del artículo 167.1 de la Ley 2/2014, posponiéndose para el futuro la resolución del recurso. Habrá que esperar, en consecuencia, algunos años, para tener un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la prohibición indirecta del *fracking* recogida en el texto refundido de la Ley de urbanismo. Mientras tanto, el artículo 47 del texto refundido de la Ley de urbanismo sería susceptible de ser aplicado.

---

<sup>1</sup> Vid. BOE núm. 281, de 20 de noviembre de 2014.

<sup>2</sup> Vid. BOE núm. 74, de 27 de marzo de 2015.

<sup>3</sup> Vid. las Sentencias 106/2014, de 24 de junio, 134/2004, de 22 de julio, y 208/2014, de 15 de diciembre, recaídas, respectivamente, sobre las leyes prohibitorias del *fracking* de Cantabria, La Rioja y Navarra.

## 6. Otras normas de interés

Además de las reseñadas, en el periodo objeto de análisis se han aprobado algunas otras normas de interés desde la perspectiva ambiental. Destacamos, entre otras, el Decreto 14/2015, de 10 de febrero, de modificación del Decreto 145/2012, de 6 de noviembre, de creación de la Comisión Interdepartamental de Nitratos y Deyecciones ganaderas; el Decreto 139/2014, de 14 de octubre, por el que se establece el régimen temporal para el periodo 2014-2018 de las autorizaciones excepcionales para la captura en vivo y tenencia de pájaros fringílicos para la cría en cautividad dirigida a la actividad tradicional de concursos de canto; el Decreto 155/2014, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el contenido mínimo para la elaboración y homologación de los planes de protección civil municipales y se establece el procedimiento para su tramitación conjunta; la Orden AAM/348/2014, de 26 de noviembre, por la que se prohíbe temporalmente la pesca de cerco en aguas interiores del litoral de Cataluña; la Orden AAM/386/2014, de 22 de diciembre, por la que se establecen periodos de veda para la modalidad de pesca de arrastre en determinadas zonas del litoral de Cataluña durante el año 2015; y la Orden AAM/389/2014, de 19 de diciembre, por la que se regula el procedimiento de habilitación del personal técnico para elaborar y firmar los planes de deyecciones ganaderas y se establece la utilización de la aplicación informática de los planes de deyecciones ganaderas y nitrógeno.

Por otra parte, mediante Acuerdo del Gobierno GOV/150/2014, de 4 de noviembre, se han declarado zonas especiales de conservación de la región biogeográfica mediterránea, integrantes de la Red Natura 2000, se ha aprobado su instrumento de gestión, y se ha autorizado al Consejero del Departament de Territori i Sostenibilitat para poder actualizar los anexos 2, 3 y 4 del Acuerdo GOV/176/2013, por el que se declaran las zonas especiales de conservación de la región biogeográfica alpina, integrantes de la red Natura 2000, y se aprueba su instrumento de gestión; y mediante Acuerdo del Gobierno GOV/13/2015, de 3 de febrero, se han revisado y se han ampliado las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

## **7. Algunas actuaciones de interés desde la perspectiva de la protección del medio ambiente**

### *7.1. Hacia un nuevo modelo de gestión de los espacios naturales protegidos en Cataluña: el Plan de gestión de los espacios naturales de protección especial de Cataluña 2015-2020*

Recientemente, el Gobierno de la Generalitat, a través del Acuerdo GOV/21/2015, de 17 de febrero, ha aprobado el Plan de gestión de los espacios naturales de protección especial de Cataluña 2015-2020, presentado por el *Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural* como “herramienta de conservación y dinamización del territorio”. Mediante este Plan, que afecta a los espacios naturales de protección especial gestionados por la Administración de la Generalitat, se replantean aspectos de su gestión con el fin de mejorar la conservación y potenciar su papel en el ámbito del desarrollo rural.

Este Plan responde a dos grandes retos principales: garantizar la conservación y mejora de los valores naturales de los espacios naturales y la biodiversidad de protección especial; y conseguir la mejora y la compatibilización de las actividades tradicionales que han modelado estos espacios y de las nuevas actividades para impulsar su papel como fuente de creación de nueva actividad socioeconómica y de crecimiento en términos de calidad. Entre sus objetivos, se encuentran los de definir la situación actual de los nueve parques naturales gestionados por la Administración de la Generalitat, de los dos parajes naturales de interés nacional y del parque nacional; identificar los principales retos de futuro, los objetivos a alcanzar y las actuaciones prioritarias a llevar a cabo desde el punto de vista de su gestión; y alinear a todos los agentes responsables para crear un marco de coordinación y colaboración activa entre los principales actores (Administración autonómica, ayuntamientos, propietarios, empresas y sociedad en general).

La elaboración del Plan ha sido liderada por el *Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural* y plantea aplicar tres principios básicos: utilizar la gestión multifuncional como herramienta principal de conservación; impulsar una gestión de excelencia fomentando que los equipos gestores sumen esfuerzos a nivel pluridisciplinar mediante la combinación del trabajo de equipos propios de la misma Administración o externos del mundo de la biodiversidad, agronomía y gestión forestal,

cinagética o turística; y alinear los intereses del territorio incluido en un espacio de protección especial con las necesidades de conservación y mejora del medio natural.

Finalmente, el Plan fija siete ejes estratégicos con unos objetivos a alcanzar hasta el año 2020: la conservación; la consecución de un modelo de gestión más ágil y eficaz; la valorización de la actividad agraria y ganadera sostenibles como elemento clave en la conservación del territorio protegido, en línea con la nueva PAC; la valorización social de los parques naturales y los espacios de especial protección; el trabajo coordinado de los parques naturales dentro de un programa marco; refuerzo de la participación de los parques en los asuntos de interés local, el apoyo a actividades de propietarios y empresas locales y el impulso de la oferta pedagógica; la garantía de la viabilidad y sostenibilidad económica de los parques. Estos objetivos se desarrollan en cincuenta líneas de actuación esquematizadas en fichas que concretan unidades responsables, calendario, presupuesto e indicadores para asegurar su seguimiento y cumplimiento.

Este Plan, bien recibido por el sector del turismo y la hostelería, sin embargo, ha recibido importantes críticas por parte de diversas asociaciones ecologistas, que han denunciado que, de nuevo, las políticas propuestas se orientan a priorizar el rendimiento económico de los espacios naturales protegidos en lugar de promover una gestión en beneficio de la conservación del paisaje y la biodiversidad.

### *7.2. La aprobación de la revisión de varios Planes en ámbitos diversos*

Durante estos últimos meses, a través de diferentes Acuerdos del Gobierno de la Generalitat, también se ha aprobado la revisión de diferentes planes en ámbitos diversos. Así, mediante Acuerdo GOV/138/2014, de 14 de octubre, se ha aprobado la revisión del Plan especial de emergencias sísmicas en Cataluña; mediante Acuerdo GOV/139/2014, de 14 de octubre, la revisión del Plan especial de emergencias por aludes en Cataluña; mediante Acuerdo GOV/165/2014, de 9 de diciembre, la revisión del Plan especial para emergencias radiológicas de Cataluña; mediante Acuerdo GOV/141/2014, de 21 de octubre, la revisión del Plan especial de emergencias por incendios forestales de Cataluña; mediante Acuerdo GOV/ 13/2015, de 10 de febrero, la revisión del Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT); mediante Acuerdo GOV/15/2015, de 10 de febrero, la revisión del Plan especial de emergencia por contaminación de las aguas marinas de Cataluña (CAMCAT); y

mediante Acuerdo GOV/29/2015, de 3 de marzo, la revisión del Plan especial de emergencia exterior del sector químico de Cataluña (PLASEQCAT).

**Sumari.** 1. L'impacte de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives pel que fa a urbanisme i medi ambient: una nova onada de reformes normatives per mitjà de la Llei d'acompanyament dels pressupostos. 1.1. Les modificacions legislatives sobre urbanisme. 1.2. Les modificacions legislatives relatives a ordenació ambiental. A. La modificació de la Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives. B. La modificació de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. C. La modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. D. La modificació del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. E. La modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric. 1.3 Les modificacions legislatives pel que fa a l'ordenació de les aigües. 1.4. Les modificacions pel que fa a medi natural i caça. 2. Noves mesures tributàries enfront de la contaminació atmosfèrica: la creació de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera generada per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera generada per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear. 3. L'aprovació del Pla de Gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya i del seu Programa de mesures. 4. El nou Catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció. 5. L'alçament de la suspensió de la prohibició indirecta de la hidrofracturació a Catalunya. 6. Altres normes d'interès. 7. Algunes actuacions d'interès des de la perspectiva de la protecció del medi ambient. 7.1. Cap a un nou model de gestió dels espais naturals protegits a Catalunya: el Pla de Gestió dels Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya 2015-2020. 7.2. L'aprovació de la revisió de diferents plans en àmbits diversos.

Aquesta crònica es concentra excepcionalment només en la producció legislativa autonòmica. En el període que hem analitzat (de l'1 d'octubre de 2014 al 31 de març de 2015), s'han publicat un bon nombre de novetats normatives pel que fa a medi ambient a Catalunya, tot i que, curiosament, no s'ha aprovat cap norma amb rang de llei específicament ambiental. En efecte, com és habitual en els últims anys, persisteix la "sequera" en les polítiques ambientals i en l'aprovació de noves normes substantives, i més que a l'aprovació de noves lleis ambientals, assistim a la modificació de les que ja existeixen, a fi d'adaptar-les al context actual, moltes vegades, com ha succeït ara, aprofitant la Llei d'acompanyament dels pressupostos per introduir reformes de la normativa ambiental catalana —algunes molt importants. En aquesta línia, cal situar la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, que modifica una sèrie normes amb rang de llei pel que fa al medi ambient, encara que potser la més destacable és la de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, atès que suposa l'adaptació de l'ordenament jurídic català a la Directiva 2010/75/UE del Parlament europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) i a la legislació bàsica estatal que la incorpora (Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats; i el Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002). A més d'aquesta llei, cal esmentar la Llei 12/2014, de 10 d'octubre,

per la qual es creen tres nous tributs ambientals a Catalunya per fer front a la contaminació atmosfèrica: l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear.

En l'àmbit reglamentari, les normes més destacables són el Decret 171/2014, de 23 de desembre, d'aprovació del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya —conseqüència de la Sentència del Tribunal Suprem de 4 d'abril de 2014, que va declarar la nul·litat de ple dret del Decret 188/2010, mitjançant el qual s'aprovava aquest Pla, per absència de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora—; i el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el Catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i s'estableix el contingut d'aquestes mesures.

També cal destacar l'aixecament de la suspensió, per part del Tribunal Constitucional, de l'article 167.1 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, que havia modificat l'article 47 del Text refós de la Llei d'urbanisme, a fi d'introduir la prohibició d'utilització de la tecnologia de la fractura hidràulica quan pugui tenir efectes negatius sobre les característiques geològiques, ambientals, paisatgístiques o socioeconòmiques de la zona, o amb relació a altres àmbits competencials de la Generalitat.

Quant als projectes de llei en tràmit, en aquest període ha iniciat la tramitació el Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica; i continua el curs de la tramitació del Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives.

En l'àmbit de la planificació, el més destacable és l'aprovació del Pla de Gestió dels Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya 2015-2020. Així mateix, el Govern també impulsa el Pla de Gestió dels Espais Naturals Protegits de Catalunya 2014-2016, que preveu la preservació i gestió d'aquests espais, d'acord amb les directives europees i sota criteris de sostenibilitat.

Finalment, des del punt de vista de les iniciatives i actuacions d'interès polític, cal destacar l'anunci del president de la Generalitat, en compareixença al Parlament de Catalunya al febrer de 2015, de la creació d'una agència de medi ambient a partir de la

fusió de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Agència de Residus de Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya i l'Institut Cartogràfic.

### **1. L'impacte de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives pel que fa a urbanisme i medi ambient: una nova onada de reformes normatives per mitjà de la Llei d'acompanyament dels pressupostos**

Recentment, s'ha publicat en el DOGC la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives pel que fa a urbanisme i medi ambient. De nou, per mitjà de la Llei d'acompanyament dels pressupostos s'aprova una bateria de modificacions legislatives que, entre altres aspectes, afecten urbanisme i medi ambient, i s'introdueixen algunes novetats de pes. No podem estar-nos de criticar novament l'ús i abús d'aquesta tècnica legislativa, de la qual se n'està fent una àmplia utilització en els últims anys a Catalunya i a través de la qual es duen a terme importants modificacions de la legislació ambiental, com succeeix aquesta vegada, per exemple, amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre. Als efectes d'aquesta crònica, ens centrarem en el títol V de la Llei 3/2015, de mesures administratives pel que fa a habitatge i urbanisme, ordenació ambiental, ordenació d'aigües i transports, i en el títol VI, de mesures administratives en competències de medi natural i agricultura. Tot això sense oblidar que també en el marc d'aquesta llei s'inclouen, dins del títol I, "Mesures fiscals", algunes modificacions que afecten alguns tributs ambientals als cànon sobre la disposició del rebuig dels residus, al cànon de l'aigua i a l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear) i a algunes taxes (entre altres, les de l'Agència Catalana de l'Aigua i de l'Agència de Residus de Catalunya, les dels permisos de caça major i menor, les dels serveis d'autorització ambiental d'activitats o les de pesca recreativa ); i en el títol IV, algunes mesures de reestructuració i racionalització del sector públic que afecten, entre altres entitats de dret públic i la Generalitat el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Institut Català d'Energia i el Centre de la Propietat Forestal.

#### *1.1. Les modificacions legislatives sobre urbanisme*

En l'àmbit urbanístic, la Llei 3/2015 modifica els articles 47, 120 i 122 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; i la disposició final tercera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme. D'aquestes modificacions en

destaquen especialment la determinació de la compatibilitat en sòl no urbanitzable de l'habitatge d'ús turístic amb l'ús d'habitatge familiar legalment implantat; alguns canvis que afecten el sistema d'actuació per reparcel·lació; i la pròrroga de la suspensió de l'eficàcia temporal de l'expropiació per ministeri de la Llei del 31 de desembre de 2014 al 31 de desembre de 2015.

### *1.2. Les modificacions legislatives relatives a ordenació ambiental*

Pel que fa a ordenació ambiental, la Llei 3/2015 ha modificat cinc normes amb rang de llei pel que fa a medi ambient: la Llei 12/1981, de 24 de desembre, de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives; la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn; la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; el Text refós de la llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció del medi ambient atmosfèric.

A. La modificació de la Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives

La Llei 3/2015 modifica diversos articles de la Llei 12/1981, de 24 de desembre. Els aspectes més destacables d'aquesta reforma són dos. En primer lloc, es modifica l'apartat 2 de l'article 7 de la Llei 12/1981, i s'introdueixen algunes novetats interessants en l'àmbit de la inspecció. Amb caràcter general, s'estableix que la inspecció de l'activitat pel que fa a les mesures addicionals de protecció del medi ambient, correspon als funcionaris de la direcció general competent pel que fa a protecció d'espais naturals afectats per activitats extractives o de les unitats territorials corresponents, que s'han de coordinar amb l'actuació inspectora dels funcionaris del departament competent pel que fa a mines. No obstant això, com a novetat, ara es preveu que l'Administració ambiental pugui encomanar les inspeccions de seguiment i comprovació dels programes de restauració a entitats col·laboradores de l'Administració degudament acreditades. S'obre, d'aquesta manera, un nou àmbit a les entitats col·laboradores de l'Administració, l'actuació de les quals ja gaudeix d'una

llarga tradició en altres sectors ambientals (un bon exemple n'és el de la prevenció i control ambiental de les activitats).

En segon lloc, s'introdueixen altres modificacions a fi d'adaptar parcialment aquesta llei als últims canvis de la normativa bàsica estatal i a l'organització interna del Departament competent des d'aquest punt de vista, coordinant adequadament l'aplicació d'alguns preceptes de la normativa ambiental i minera. Des d'aquesta perspectiva, es concreta, per exemple, que l'obligació del titular de dipositar la fiança que correspongui en cada moment i de restaurar els terrenys afectats en les condicions establertes en el programa de restauració, continua vigent fins al moment que l'Administració ambiental accepti definitivament la restauració efectuada a la finalització, si és el cas, del termini de garantia, independentment de la situació administrativa de l'autorització minera; es determinen els òrgans competents per imposar les sancions corresponents a infraccions lleus (director dels serveis territorials competents pel que fa a protecció dels espais afectats per activitats extractives), greus (director competent pel que fa a protecció dels espais afectats per activitats extractives) i molt greus (secretari del departament competent pel que fa a protecció dels espais afectats per activitats extractives); i s'habilita el secretari del departament competent pel que fa a protecció dels espais naturals afectats per activitats extractives, en els casos d'urgència en què perilli la protecció del medi ambient, per suspendre provisionalment els treballs de l'activitat extractiva fins que s'adoptin les mesures adequades.

B. La modificació de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn

Amb relació a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, les modificacions destacables són tres. En primer lloc, es matisa la prohibició de la il·luminació en les pistes d'esquí. En la seva nova redacció, la lletra e) de l'article 6.6 prohibeix la il·luminació de les pistes d'esquí en zones E1, excepte per a esdeveniments esportius extraordinaris, segons els que estableix el reglament, i en la resta de zones, per una duració superior a un valor establert per reglament. Així mateix, preveu que, per reglament, també es puguin establir les franges horàries en què es permet l'enllumenat i altres condicions addicionals per protegir el medi nocturn i la fauna.

En segon lloc, es modifica el règim d'inspecció i control de les activitats sotmeses a la normativa de prevenció i control ambiental (art. 25). El titular de l'activitat ha de garantir en tot moment que es compleixen les prescripcions establertes relatives a la prevenció de la contaminació lumínica en el permís de l'activitat. Quant als controls ambientals inicials o les inspeccions ambientals d'inici de l'activitat de les activitats subjectes a la normativa de prevenció i control ambiental, han d'incloure la comprovació del compliment de les prescripcions establertes en els corresponents permisos pel que fa a prevenció de la contaminació lumínica. Respecte del compliment de les prescripcions quant a prevenció de la contaminació lumínica incloses en els permisos ambientals, s'estableix una periodicitat de control, com a màxim, cada sis anys, tenint en compte que, sempre que sigui possible, aquestes actuacions de comprovació s'han de dur a terme en el marc del control ambiental periòdic o de la inspecció periòdica integrada dels establiments. També s'incorpora l'exigència, per a les activitats sotmeses al règim de comunicació que disposen d'instal·lacions d'il·luminació exterior de més de 5 kW de potència, d'acompanyar la comunicació d'una certificació acreditativa del compliment de les prescripcions pel que fa a prevenció de la contaminació lumínica lliurada per una entitat col·laboradora de l'Administració o pels serveis tècnics municipals.

En tercer lloc, torna a modificar-se la disposició transitòria primera de la Llei 6/2001. De conformitat amb el seu redactat actual, s'imposa el cessament del funcionament de qualsevol element d'una instal·lació d'enllumenat exterior que estigui inclosa en algun dels supòsits següents: làmpades ubicades en zona E1 que no són de vapor de sodi o altres tecnologies de característiques espectrals semblants, làmpades de vapor de mercuri d'alta pressió i llums que tinguin un flux d'hemisferi superior instal·lat superior al 50%. El termini establert a aquests efectes venç el 31 de març de 2016, si es tracta d'instal·lacions ubicades en un punt de referència o en la seva àrea d'influència; el 31 de desembre de 2016, si es tracta d'instal·lacions de titularitat pública; o el 31 de desembre de 2018, si es tracta d'instal·lacions de titularitat privada.

C. La modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

La modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, respon en gran manera a la seva necessitat d'adaptació a la Directiva

d'emissions industrials i a la legislació bàsica estatal. Hem de criticar que la incorporació de les previsions d'una directiva europea i de la corresponent legislació bàsica estatal, en un àmbit tan important com és el de la intervenció sobre les activitats de més incidència ambiental, a les quals afecta la normativa a què ens referim, es faci aprofitant l'aprovació de la Llei d'acompanyament dels pressupostos, sense haver propiciat el necessari debat i participació. També hem de cridar l'atenció sobre el fet que amb aquesta reforma ja en són cinc de la Llei 20/2009 —la major part per mitjà de macrolleis d'aquesta mena, en què es modifiquen nombroses normes en àmbits sectorials diversos que no tenen connexió entre si—, a pesar que han passat poc més de cinc anys des que es van aprovar. I s'apropa una nova modificació, tenint en compte la pròxima aprovació com a Llei de l'actual Projecte de Llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica que, de nou, ha de modificar la Llei 20/2009. Potser ja és el moment de fer una reflexió profunda del règim de prevenció i control ambiental d'activitats a Catalunya i d'aprovar una nova llei que doni resposta a les actuals necessitats en aquest àmbit, però sense fer-ho precipitadament i seguint, aquesta vegada, la tramitació ordinària com a projecte de llei, que propiciï el debat parlamentari necessari en un tema d'extraordinària importància. En aquesta línia, cal recordar, com ja apuntàvem en l'anterior crònica, que el Govern ja va aprovar fa uns quants mesos una memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de prevenció, control i qualitat ambiental, que havia de substituir la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i que neix amb la voluntat de racionalitzar i simplificar tràmits en la intervenció sobre les activitats econòmiques.

Amb la finalitat d'adaptar la normativa catalana a la Directiva d'emissions industrials i a la legislació bàsica estatal, es duen a terme una sèrie de modificacions que afecten les activitats de l'annex I.1, que són les afectades per aquesta normativa. Entre aquestes modificacions, destaquem la introducció de noves definicions (per exemple, les de “conclusions de les millors tècniques disponibles”, “informe base o informe de la situació de partida”); la regulació del règim jurídic de les activitats de l'annex I.1 quan la modificació d'una instal·lació comporti una disminució de la seva capacitat de producció fins a quedar per sota dels llindars de l'annex corresponent; la regulació de la revisió d'ofici per a les activitats de l'annex I.1, tenint en compte que per a aquestes activitats desapareix la revisió periòdica, encara que sí que es manté per a les de l'annex

I.2 i II; el règim del cessament definitiu de les activitats de l'annex I.1, regulat *ex novo*, en línia amb el que estableix la Directiva d'emissions industrials i en la Llei 16/2002, després de la seva modificació de 2013; el nou sistema d'inspecció per a aquestes activitats —substitutori del de control—, instrumentat mitjançant el Pla d'Inspecció Ambiental integrada i el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada, ambdós ara àmpliament regulats en la Llei 20/2009, segons les determinacions de la directiva europea i de la legislació bàsica estatal; la regulació de l'actuació administrativa relativa a les visites d'inspecció i les visites d'inspecció no programades, i les adaptacions del règim sancionador a aquestes modificacions.

També són objecte de modificació els annexos de la Llei 20/2009. D'una banda, se suprimeixen determinades activitats dels annexos, bàsicament les de radiocomunicacions i turisme. D'una altra, els projectes d'exploració o investigació que utilitzen la tècnica de la fractura hidràulica s'inclouen en l'annex I.2.a) i se sotmeten a avaluació d'impacte ambiental i a autorització ambiental, per la seva elevada incidència ambiental.

D. La modificació del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus

La Llei 3/2015 modifica un bon nombre de preceptes del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. Destaquem, en particular, les modificacions següents:

— La nova definició de “deixalleria”, que inclou, a més dels residus municipals, els productes per reutilitzar, a fi d'adaptar la definició formal d'aquesta instal·lació a la realitat actual. La deixalleria es defineix ara com a centre de recepció i emmagatzematge selectiu de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors: la preparació per a la reutilització, la valoració i la disposició final.

— La modificació de diversos preceptes del Text refós [art. 5.1, 22.1, 23.1.c), 24.1.d), 28.2, 29.3 i disposició final 2a], a fi de poder regular mitjançant un reglament la producció i la gestió de tots els residus i no sols la de determinades categories de residus, com s'establia anteriorment.

— La modificació del règim sancionador, a través d'una nova regulació de les infraccions administratives en aquest àmbit (es fa una nova redacció dels articles 72, 74, 75 i 76), i també dels graus de la multa (nova redacció de l'art. 80); la incorporació d'un nou article, el 77 bis, de conformitat amb el qual s'estableix que és causa de baixa en els corresponents registres administratius de l'Agència de Residus de Catalunya el fet d'haver estat sancionat mitjançant una resolució ferma per la comissió de determinades infraccions administratives, quan així ho hagi acordat l'òrgan sancionador; la inclusió d'un precepte, el 80 bis, relatiu al reconeixement de responsabilitat i pagament voluntari, que permet al presumpte infractor fer el pagament voluntari del 50% de l'import de la sanció de multa determinada en la proposta de resolució, sempre que es tracti d'infraccions lleus i que implica el reconeixement de responsabilitat per part del presumpte infractor i la seva renúncia a formular al·legacions, la terminació del procediment el dia en què es fa el pagament i la finalització de la via administrativa; la introducció de canvis en la potestat sancionadora mitjançant la modificació del límit de la potestat sancionadora (els alcaldes de municipis de menys de 50.000 habitants, fins a 30.000 euros; els de municipi de més de 50.000 habitants, el president de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i el director de l'Agència de Residus de Catalunya, fins a 300.000 euros; el president de l'Agència de Residus de Catalunya, fins a 600.000 euros, i el Govern, fins a 1.200.000 euros) i dels òrgans competents per imposar sancions que no siguin multes; les modificacions en els subjectes responsables, mitjançant la incorporació d'un nou paràgraf al final de l'apartat 2 de l'article 91, en el qual es preveu que, en els casos d'imputació d'una infracció a una persona jurídica, puguin ser considerades també responsables les persones que integren els òrgans rectors o de direcció i també els tècnics responsables de l'activitat sempre que es demostrï l'existència de culpa o negligència en l'exercici de les seves funcions; les noves previsions entorn de l'extinció de la responsabilitat, l'extinció de la sanció i el procediment abreviat (nous articles 91 bis, 91 ter i 103 bis); i algunes modificacions que afecten les mesures cautelars (art. 96), la reparació i execució subsidiària (art. 124).

### E. La modificació de La Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric

La Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, únicament és objecte de modificació en un punt, en relació amb el Fons per a la protecció de l'ambient atmosfèric. Aquest fons, regulat en l'article 15 de la Llei 22/1983 —prèviament modificat per mitjà de la Llei 12/2014, de 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear—, es va crear per finançar les despeses i les inversions públiques relatives a la protecció de l'ambient atmosfèric i a la millora de la qualitat acústica, a fomentar les actuacions en instal·lacions públiques i privades destinades a disminuir els nivells d'emissió de contaminació a l'atmosfera i, en general, a les polítiques de prevenció i millora de la qualitat atmosfèrica. Aquest fi es nodreix de diferents recursos (import de les sancions imposades per l'Administració de la Generalitat, com a conseqüència d'infraccions de la normativa que regula la contaminació atmosfèrica; les donacions, les herències, les aportacions i les ajudes que els particulars, les empreses, les institucions o altres administracions destinen específicament a aquest fons; els romanents procedents d'economies en la contractació i els ingressos procedents de revocacions o renunciacions d'ajudes o subvencions finançades amb el Fons; i les aportacions del Pressupost de la Generalitat de Catalunya i qualsevol altre ingrés de dret públic que li sigui assignat reglamentàriament). Amb la modificació introduïda per la Llei 3/2015 en la lletra b) de l'apartat 4 de l'article 15, ara es preveuen, dins dels recursos que han de nodrir el Fons, els ingressos derivats dels impostos ambientals que graven les emissions contaminants a l'atmosfera i que meriten finalistes (s'afegeix aquest últim incís).

#### *1.3. Les modificacions legislatives pel que fa a ordenació de les aigües*

Les modificacions legislatives de la Llei 3/2015 pel que fa a aigües es concreten en la modificació de diversos articles del Text refós de la legislació pel que fa a les aigües de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. D'aquestes modificacions en destaquem, en primer lloc, una sèrie de canvis que afecten la planificació hidrològica del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, en la qual s'integren el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, el programa de

mesures, els programes de control i els programes i plans de gestió específics. En aquest context, també es concreta l'àmbit d'aplicació del Programa de mesures i dels plans i programes de gestió específics per tractar aspectes concrets de l'abastiment i del sanejament de les aigües residuals i d'altres matèries relacionades amb el cicle de l'aigua que siguin competència de la Generalitat.

En segon lloc, la inclusió, amb la incorporació d'un nou apartat 4 en l'article 52, de la possibilitat que els ens locals deleguin en l'Agència Catalana de l'Aigua la gestió de les instal·lacions que integren els sistemes públics de sanejament en alta de la seva competència, amb independència del règim de titularitat d'aquestes instal·lacions.

En tercer lloc, una sèrie de modificacions que afecten les atribucions de recursos de l'Agència Catalana de l'Aigua per contribuir al finançament dels sistemes públics de sanejament, de conformitat amb el que estableixi la planificació hidrològica. Per a l'exercici pressupostari 2015 i següents, les atribucions de recursos han d'incloure els costos indirectes d'explotació dels serveis públics de sanejament, com les despeses de gestió d'instal·lacions i les despeses de gestió de sistema. Es pretén, d'aquesta manera, un sistema d'atribució de fons que permeti assegurar als ens gestors dels sistemes públics de sanejament més complexos la percepció dels recursos econòmics suficients per al manteniment dels serveis de competència local. Així mateix, es preveu un model d'atribució de recursos específic per als ens gestors que s'hagin constituït en entitats locals de l'aigua. En efecte, s'habilita el Govern per autoritzar la subscripció d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i els ens gestors de sistemes públics de sanejament en alta que s'hagin constituït en entitats locals de l'aigua, a fi de definir un marc d'atribució de recursos procedents del cànon de l'aigua per finançar les despeses d'explotació, de reposició i d'inversió corresponents als sistemes públics de sanejament en alta. Amb aquestes reformes, es pretén acabar de perfilar la reforma del model d'atribució de recursos que du a terme l'Agència Catalana de l'Aigua per contribuir al finançament dels sistemes públics de sanejament en alta, amb l'objectiu d'aconseguir més eficiència en l'assignació de fons públics.

Finalment, s'afegeix una nova disposició addicional, la divuitena, al Text refós de la legislació pel que fa a les aigües de Catalunya, en relació amb els serveis i activitats d'oci en els embassaments. Aquesta disposició preveu que, en l'àmbit del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, els ens locals o les agrupacions d'ens locals poden assumir amb caràcter preferent l'explotació dels serveis i les activitats d'oci que es puguin

establir en el domini públic hidràulic i en les zones de servitud i de policia dels embassaments en llits públics. Aquesta explotació pot fer-se de manera directa o indirecta mitjançant qualsevol de les formes de gestió que estableix la legislació de règim local.

#### *1.4. Les modificacions pel que fa a medi natural i caça*

El títol VI de la Llei 3/2015 agrupa les mesures administratives en competències de medi natural i agricultura. Amb relació al medi natural, es modifiquen la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural, per tipificar com a infracció administrativa la circulació, sense causa justificada, per vials no aptes per a la circulació motoritzada, o per les pistes i els camins delimitats en xarxes i itineraris sense disposar d'autorització específica; i el Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, a fi de concretar que el Registre general d'animals de companyia pot ser gestionat directament pel departament competent relatiu a medi ambient, o bé mitjançant qualsevol de les modalitats que estableix la legislació de contractes del sector públic.

Respecte a la caça, es modifica la Llei 8/2012, de 25 de juny, de modificació dels límits i la denominació de la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars-Aran, per articular la segregació del terme municipal de Vall de Boí d'aquesta reserva nacional, i es crea la Reserva Nacional de Caça de Vall de Boí.

## **2. Noves mesures tributàries enfront de la contaminació atmosfèrica: la creació de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear**

Mitjançant la Llei 12/2014, de 10 d'octubre, s'han creat a Catalunya, com a tributs propis de la Generalitat, tres nous impostos, a fi de reduir la contaminació atmosfèrica i assolir els nivells de qualitat de l'aire que estableix la normativa: l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear. Tal com

posa de manifest el preàmbul de la Llei, aquests nous impostos “es configuren des d’una doble vessant. D’una banda, llur caràcter extrafiscal pretén orientar el comportament dels agents econòmics afectats, amb la interiorització dels costos no desitjats i de les externalitats negatives que generen amb llur activitat, amb l’objectiu de contribuir a la millora i la preservació del medi ambient. D’altra banda, esdevenen instruments de política econòmica i, en aquest sentit, no es pot negligir que concorre també una finalitat fiscal, per tal com amb llur exacció s’obtidran ingressos addicionals que han de permetre subvenir, en part, a les despeses i inversions públiques en matèria de medi ambient i, en general, a les polítiques de foment de la preservació i la millora de la qualitat del medi ambient”.

Aquesta Llei s’estructura en quatre capítols. El capítol I regula l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, l’objecte del qual és gravar l’emissió d’òxids de nitrogen de les aeronaus en vols comercials de passatgers en els aeròdroms durant el cicle LTO (*landing and take-off*) —que comprèn les fases de rodatge d’entrada a l’aeroport, de rodatge de sortida de l’aeroport, d’enlairament i d’aterratge—, pel risc que provoca en el medi ambient. La creació d’aquest impost constitueix una novetat en l’ordenament jurídic espanyol, ja que els precedents més propers es troben a França, Alemanya i Regne Unit.

El capítol II conté els preceptes dedicats a l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria, que grava l’emissió a l’atmosfera de les substàncies a les quals es refereix l’article 12, amb la finalitat d’incentivar conductes més respectuoses cap al medi ambient atmosfèric i assolir millor qualitat de l’aire, generades en determinades instal·lacions (les instal·lacions industrials classificades en l’annex I.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; i les instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica nominal superior a 20 megawatts tèrmics). Aquesta figura impositiva, tal com posa de manifest el preàmbul de la Llei, es crea com a instrument d’estímul i incentiu a la reducció de la contaminació atmosfèrica, amb millores tècniques per reduir les emissions atmosfèriques industrials i, per tant, millorar la qualitat de l’aire dels ciutadans pròxims a activitats industrials. D’aquesta manera, Catalunya s’uneix a altres comunitats autònomes que ja tenen aprovats impostos semblants, com Aragó, Castella-la Manxa, la Regió de Múrcia, Galícia i Andalusia.

El capítol III regula l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, per la incidència que pot tenir en el medi ambient. L'objecte d'aquest impost és gravar els riscos per l'impacte i eventual dany en el medi ambient derivats de l'activitat de producció d'energia elèctrica d'origen nuclear efectuada en el territori de Catalunya. El seu precedent més immediat està a la Comunitat Valenciana, que, mitjançant la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, crea l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient, un dels fets imposables del qual és el dany, l'impacte, l'afecció i el risc derivat de la producció d'energia elèctrica. La creació d'aquest impost comporta, al seu torn, la modificació de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, que regula el gravamen de protecció civil que grava les centrals nuclears, de manera que aquestes, a partir de l'entrada en vigor de la present llei, queden excloses de la tributació del gravamen.

El capítol IV recull una sèrie de normes comunes als tres impostos, que inclouen aspectes relatius a aspectes de gestió, recaptació i inspecció; el règim d'infraccions i sancions; i el de recursos i reclamacions.

Finalment, cal destacar que aquesta Llei, com ja avancem, també modifica l'article 15 de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció del medi ambient atmosfèric, relatiu al Fons per a la protecció de l'ambient atmosfèric.

### **3. L'aprovació del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i del seu Programa de mesures**

Recentment, s'ha aprovat el Decret 171/2014, de 23 de desembre, d'aprovació del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i s'ha adoptat l'Acord GOV/186/2014, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Programa de mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.

El Govern de la Generalitat ja havia aprovat fa uns quants anys, en compliment del que estableix la Directiva marc d'aigües, el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2009-2015, mitjançant el Decret 188/2010, de 23 de novembre, i el seu Programa de mesures, mitjançant l'Acord GOV/238/2010, de 23 de novembre. No obstant això, la Sentència del Tribunal Suprem de 4 d'abril de 2014 va declarar la nul·litat de ple dret del Decret 188/2010, per falta de Dictamen de la Comissió Jurídica

Assessora, i per extensió, del Programa de mesures, la qual cosa va obligar a retrotreure la tramitació per esmenar aquest defecte procedimental, una vegada adoptat l'Acord adoptat pel Govern el 22 de juliol de 2014, relatiu a la conservació de tràmits del procediment d'aprovació de l'esmentat Decret i del Programa de mesures. Formalitzat aquest tràmit, es va elevar el Govern per a la seva nova aprovació, efectuada ara mitjançant el Decret 171/2014, de 23 de desembre, d'aprovació del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i l'Acord GOV/186/2014, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Programa de mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.

#### **4. El nou Catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció**

Recentment el Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el Catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i s'estableix el contingut d'aquestes mesures, d'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i la disposició addicional segona del Decret 82/2010, de 29 de juny, que ordena l'actualització del catàleg al cap de quatre anys d'haver entrat en vigor, basant-se en l'experiència adquirida com a conseqüència de la seva aplicació. Aquest decret, que deroga l'esmentat Decret 82/2010, té com a objecte regular les actuacions destinades a adoptar les mesures d'autoprotecció i els mitjans personals i materials necessaris per afrontar situacions de risc i d'emergència a les empreses i, en general, les entitats i organismes que poden resultar afectats de manera especial per situacions de greu risc col·lectiu, intern o extern, de catàstrofe o de calamitat pública, i també en les activitats, centres i instal·lacions i les seves dependències, públiques i privades, que poden generar aquestes situacions. Les finalitats que es persegueixen són determinar el catàleg d'activitats i tipus de centres amb obligació d'autoprotecció; establir el contingut mínim dels plans d'autoprotecció dels centres o activitats objecte d'aquesta norma; establir els sistemes de coordinació entre les activitats i centres objecte d'aquest decret i els serveis públics que formen el sistema de protecció civil; establir els sistemes de control per part de l'Administració, tant autonòmica com local, respecte a la validació del pla, el seu registre i el seu procés d'implantació; regular els mecanismes organitzatius i la provisió dels mitjans necessaris per assegurar la detecció i resposta ràpida i per evitar efectes de gran intensitat o impacte en la població; i assegurar l'existència i el manteniment dels mitjans mínims

d'autoprotecció per part de les activitats i centres a través del control periòdic per part de l'Administració, tant autonòmica com local.

Quant a l'àmbit d'aplicació, les disposicions d'aquest decret s'apliquen a les activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya detallats en l'annex I, epígraf A, i a les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local compresos en l'annex I, epígraf B. Pel que fa al catàleg, es redueixen de manera significativa les activitats i els centres afectats i s'adequa als que és imprescindible la realització de plans d'autoprotecció, i s'estableix una sèrie de criteris amb l'objectiu de crear un catàleg amb una estructura més senzilla, amb una relació d'activitats i centres més detallada i precisa. En aquest sentit, s'equiparen determinades activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya en els mateixos l·lindars que estableix la Norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que poden originar situacions d'emergència, aprovada pel Reial decret 393/2007, de 23 de març. Se simplifica el nombre d'activitats afectades per la norma i s'elimina la distinció entre les activitats amb reglamentació específica o sense. Així mateix, les activitats o centres que s'inclouen en el catàleg en funció de la seva ocupació de persones es fusionen en un criteri més genèric i de referència, i quant a les activitats sanitàries, docents i residencials públiques, se n'homogeneïzen els criteris d'ocupació. Quant al catàleg d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil local, s'estableix un catàleg de mínims amb uns l·lindars més amplis perquè siguin els mateixos municipis els que regulin d'una forma més concreta les activitats i centres que siguin del seu interès de conformitat amb el seu àmbit competencial.

Igualment, la direcció general competent pel que fa a protecció civil o bé el municipi afectat, d'ofici o a petició de la persona interessada, poden incloure en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret noves activitats i centres que, sense que estiguin inclosos en els epígrafs A i B de l'annex I, presentin un especial risc o un risc significatiu, respectivament, seguint el procediment establert. Així mateix, la persona titular d'un centre o activitat no sotmès al present Decret pot elaborar un protocol d'actuació en emergències per regular internament les actuacions destinades a adoptar mesures d'autoprotecció i els mitjans personals i materials necessaris per afrontar situacions de risc i d'emergència. Si l'activitat afecta més d'un municipi, té la consideració d'activitat d'interès per a la protecció civil de Catalunya. D'altra banda, queden exclosos del control administratiu de la Generalitat els centres, establiments o instal·lacions

dependents del Ministeri de Defensa, d'institucions penitenciàries, de les forces i cossos de seguretat i les duanes, i també els òrgans judicials.

## **5. L'alçament de la suspensió de la prohibició indirecta de la hidrofracturació a Catalunya**

Tal com vam posar de manifest en la primera crònica de 2014, després de la modificació operada per l'article 167.1 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, l'article 47, en l'apartat 10, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, incorpora una prohibició indirecta de la hidrofracturació a Catalunya. En efecte, d'acord amb aquest precepte, en l'explotació de recursos naturals en sòl no urbanitzable, en el cas d'aprofitaments d'hidrocarburs, no es permet utilitzar la tecnologia de la fractura hidràulica quan pugui tenir efectes negatius sobre les característiques geològiques, ambientals, paisatgístiques o socioeconòmiques de la zona, o amb relació a altres àmbits competencials de la Generalitat. En la pràctica, això implica que no poden atorgar-se permisos urbanístics per construir i posar en marxa en territori català instal·lacions amb l'objecte d'utilitzar aquesta tècnica d'extracció d'hidrocarburs. D'aquesta manera, a Catalunya s'incorporava una prohibició indirecta de l'ús d'aquesta tècnica. No obstant això, contra la Llei 2/2014, de 27 de gener, el president del Govern va interposar recurs d'inconstitucionalitat, recurs que el Tribunal Constitucional va acordar admetre a tràmit mitjançant la Providència de 18 de novembre de 2014, i es van suspendre la vigència i l'aplicació dels preceptes impugnats des de la data d'interposició del recurs (30 d'octubre de 2014) per a les parts del procés, i des de la publicació del corresponent edicte en el BOE per als tercers<sup>4</sup>.

Recentment, el Ple del Tribunal Constitucional, mitjançant la Interlocutòria de 17 de març de 2015, ha aixecat la suspensió de l'article 167.1 i de la disposició transitòria cinquena, apartats 1 i 3, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, que s'havia produït amb l'admissió a tràmit del recurs d'inconstitucionalitat esmentat<sup>5</sup>. D'aquesta manera, el Tribunal Constitucional actua de manera diferent de com ho havia fet en els recursos

---

<sup>4</sup> Vid. BOE núm. 281, de 20 de novembre de 2014.

<sup>5</sup> Vid. BOE núm. 74, de 27 de març de 2015.

d'inconstitucionalitat presentats contra les lleis prohibitives de la hidrofracturació de Cantàbria, la Rioja i Navarra. En aquests casos, quan corresponia a l'Alt Tribunal adoptar la decisió entorn del manteniment o alçament de la suspensió d'aquestes normes, l'opció va ser la de dictar ja la Sentència corresponent resolutòria del recurs, i declarar la inconstitucionalitat d'aquestes lleis autonòmiques<sup>6</sup>. En canvi, en el cas de Catalunya, l'opció ha estat aixecar la suspensió de l'article 167.1 de la Llei 2/2014, i posposar-se per al futur la resolució del recurs. Caldrà esperar, en conseqüència, uns quants anys, per tenir un pronunciament sobre la constitucionalitat de la prohibició indirecta de la hidrofracturació recollida en el Text refós de la Llei d'urbanisme. Mentrestant, l'article 47 del Text refós de la Llei d'urbanisme seria susceptible de ser aplicat.

## 6. Altres normes d'interès

A més de les que hem ressenyat, en el període objecte d'anàlisi s'han aprovat altres normes d'interès des de la perspectiva ambiental. Destaquem, entre altres, el Decret 14/2015, de 10 de febrer, de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes; el Decret 139/2014, de 14 d'octubre, pel qual s'estableix el règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat dirigida a l'activitat tradicional de concursos de cant; el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta; l'Ordre AAM/348/2014, de 26 de novembre, per la qual es prohibeix temporalment la pesca de cercol en aigües interiors del litoral de Catalunya; l'Ordre AAM/386/2014, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen períodes de veda per a la modalitat de pesca d'arrossegament en determinades zones del litoral de Catalunya durant l'any 2015, i l'Ordre AAM/389/2014, de 19 de desembre, per la qual es regula el procediment d'habilitació

---

<sup>6</sup> *Vid.* les sentències 106/2014, de 24 de juny; 134/2004, de 22 de juliol, i 208/2014, de 15 de desembre, que han recaigut, respectivament, sobre les lleis prohibitives de la hidrofracturació de Cantàbria, la Rioja i Navarra.

del personal tècnic per elaborar i signar els plans de dejeccions ramaderes i s'estableix la utilització de l'aplicació informàtica dels plans de dejeccions ramaderes i nitrogen.

D'altra banda, mitjançant l'Acord del Govern GOV/150/2014, de 4 de novembre, s'han declarat zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la Xarxa Natura 2000, se n'ha aprovat l'instrument de gestió, i s'ha autoritzat al conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat per poder actualitzar els annexos 2, 3 i 4 de l'Acord GOV/176/2013, pel qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants de la Xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió; i mitjançant l'Acord del Govern GOV/13/2015, de 3 de febrer, s'han revisat i s'han ampliat les zones vulnerables a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.

## **7. Algunes actuacions d'interès des de la perspectiva de la protecció del medi ambient**

### *7.1. Cap a un nou model de gestió dels espais naturals protegits a Catalunya: el Pla de Gestió dels Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya 2015-2020*

Recentment, el Govern de la Generalitat, per mitjà de l'Acord GOV/21/2015, de 17 de febrer, ha aprovat el Pla de Gestió dels Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya 2015-2020, presentat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural com a "eina de conservació i dinamització del territori". Mitjançant aquest pla, que afecta els espais naturals de protecció especial gestionats per l'Administració de la Generalitat, es replantegen aspectes de la seva gestió a fi de millorar la conservació i potenciar el seu paper en l'àmbit del desenvolupament rural.

Aquest pla respon a dos grans reptes principals: garantir la conservació i millora dels valors naturals dels espais naturals i la biodiversitat de protecció especial; i aconseguir la millora i la compatibilitat de les activitats tradicionals que han modelat aquests espais i de les noves activitats per impulsar el seu paper com a font de creació de nova activitat socioeconòmica i de creixement en termes de qualitat. Entre els seus objectius, es troben els de definir la situació actual dels nou parcs naturals gestionats per l'Administració de la Generalitat, dels dos paratges naturals d'interès nacional i del parc nacional; identificar els principals reptes de futur, els objectius que cal assolir i les actuacions prioritàries que s'han de dur a terme des del punt de vista de la seva gestió; i alinear tots

els agents responsables per crear un marc de coordinació i col·laboració activa entre els principals actors (Administració autonòmica, ajuntaments, propietaris, empreses i societat en general).

L'elaboració del Pla ha estat liderada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i planteja aplicar tres principis bàsics: utilitzar la gestió multifuncional com a eina principal de conservació; impulsar una gestió d'excel·lència fomentant que els equips gestors sumin esforços des del punt de vista pluridisciplinari mitjançant la combinació del treball d'equips propis de la mateixa Administració o externs del món de la biodiversitat, agronomia i gestió forestal, cinegètica o turística; i alinear els interessos del territori inclòs en un espai de protecció especial amb les necessitats de conservació i millora del medi natural.

Finalment, el Pla estableix set eixos estratègics amb els objectius a que s'han d'assolir fins al 2020: la conservació; la consecució d'un model de gestió més àgil i eficaç; la valoració de l'activitat agrària i ramadera sostenibles com a element clau en la conservació del territori protegit, en línia amb la nova PAC; la valoració social dels parcs naturals i els espais d'especial protecció; el treball coordinat dels parcs naturals dins d'un programa marc; reforç de la participació dels parcs en els assumptes d'interès local, el suport a activitats de propietaris i empreses locals i l'impuls de l'oferta pedagògica; la garantia de la viabilitat i sostenibilitat econòmica dels parcs. Aquests objectius es despleguen en cinquanta línies d'actuació esquematitzades en fitxes que concreten unitats responsables, calendari, pressupost i indicadors per a assegurar-ne el seguiment i compliment.

Aquest pla, ben rebut pel sector del turisme i l'hostaleria, no obstant això, ha rebut importants crítiques per part de diverses associacions ecologistes, que han denunciat que, de nou, les polítiques proposades s'orienten a prioritzar el rendiment econòmic dels espais naturals protegits en comptes de promoure la gestió en benefici de la conservació del paisatge i la biodiversitat.

## *7.2. L'aprovació de la revisió de diferents plans en àmbits diversos*

Durant aquests últims mesos, per mitjà de diferents acords del Govern de la Generalitat, també s'ha aprovat la revisió de diferents plans en àmbits diversos. Així, mitjançant l'Acord GOV/138/2014, de 14 d'octubre, s'ha aprovat la revisió del Pla Especial

d'Emergències Sísmiques a Catalunya; mitjançant l'Acord GOV/139/2014, de 14 d'octubre, la revisió del Pla Especial d'Emergències per Allaus a Catalunya; mitjançant l'Acord GOV/165/2014, de 9 de desembre, la revisió del Pla Especial per a Emergències Radiològiques de Catalunya; mitjançant l'Acord GOV/141/2014, de 21 d'octubre, la revisió del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya; mitjançant l'Acord GOV/13/2015, de 10 de febrer, la revisió del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT); mitjançant l'Acord GOV/15/2015, de 10 de febrer, la revisió del Pla Especial d'Emergència per Contaminació de les Aigües Marines de Catalunya (CAMCAT); i mitjançant l'Acord GOV/29/2015, de 3 de març, la revisió del Pla Especial d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT).